

BOLIVIA PRESS 2000 – N° 4
(31 de marzo del 2000)

Desde un país semiparalizado por bloqueos de carreteras (con intervención militar) y desde una Cochabamba convulsionada por una movilización social de imprevisible desenlace, mandamos el presente boletín con un retraso para el cual pedimos nuestras disculpas.

A su vez le adelantamos el envío de algunos boletines especiales que reflejan la situación que se vive en estos momentos en la ciudad de Cochabamba.

En este boletín:

NOTICIAS COMENTADAS

1. Se incrementa el comercio de gas con el Brasil
2. Gobierno decide novedosa medida proteccionista frente a Chile
3. Violento conflicto intercampesino en Cochabamba
4. Linchamientos en barrios populares de Cochabamba
5. El conflicto del agua en Cochabamba:
Asamblea de la Cochabambinidad versus Consulta Popular

TEMA DE ANÁLISIS: El Plan de Reactivación Económica del Gobierno

MISCELÁNEA

NOTICIAS COMENTADAS

1. MAS GAS A BRASIL...¿ MAS DUCTOS?

LOS HECHOS. Un encuentro de los presidentes de Brasil y Bolivia sirvió para que ambos países convinieran la construcción de un nuevo ducto de 450 kilómetros a cargo de empresa petrolera Petrobras, paralelo al YABOC (ducto que va de Yacuiba a Campo Grande, Santa Cruz), con lo que a partir del 2004 Bolivia (que a estas alturas ha quintuplicado sus reservas de gas y aparece como el segundo productor potencial de Sudamérica) podrá exportar gas al vecino país hasta un total de 30 MMCD (Millones de Metros Cúbicos Día).

COMENTARIO. Bien vistas las cosas, nuestro país en realidad sirve de escenario para la competencia de varios gigantes petroleros como son Petrobras y Enron-Shell (= Transredes), ya que, en este caso, el nuevo gasoducto está pensado básicamente para que Petrobras pueda desequilibrar el inicial monopolio de Transredes y transportar y exportar (en régimen preferencial) su propio gas, es decir el de los yacimientos originalmente bolivianos de San Alberto y San Antonio. El beneficio para Bolivia será mínimo, comparado con el volumen de riquezas entregadas y con los beneficios obtenidos por las transnacionales.

2. GOBIERNO DECIDE NOVEDOSA MEDIDA PROTECCIONISTA FRENTE A CHILE

LOS HECHOS. Ante la decisión chilena de elevar entre un 5 y un 30 % los aranceles de importación para aceites comestibles, perjudicando así las ventas bolivianas e incumpliendo el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-22) de 1993, el Ministro de Comercio Exterior anunció que para proteger su industria nacional Bolivia aplicará, por 179 días, una *salvaguarda* del 30 % adicional al gravamen arancelario para la importación de yogur, helados, vinos, botellas, pañuelos y artículos higiénicos procedentes de Chile.

COMENTARIO. La medida del gobierno boliviano, pese a su timidez (es sólo para 179 días), constituye una verdadera novedad, ya que van a hacer 15 años que nuestro país es el único que no ejerce ningún tipo de protección arancelaria en favor de su producción interna, tanto industrial como agropecuaria. Desde el D.S. 21060 los productores bolivianos, a título de libre mercado, se encuentran total y desigualmente desamparados respecto de sus competidores de otros países, ya que todos los demás (tanto en el Norte como en el Sur, y muy especialmente Chile) saben conciliar el modelo neoliberal con la protección de sus productores.

3. VIOLENTO CONFLICTO INTERCAMPEÑO EN COCHABAMBA

LOS HECHOS. Dos congresos campesinos, convocados por los dirigentes Román Loayza y Alejo Véliz, el primero en Tiraque y el segundo en Tapacarí, han dado lugar a una confrontación violenta por la ocupación de la sede de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Primero fueron los reunidos en Tiraque los que, dirigidos por Moisés Torres tomaron pacíficamente la sede. Después los de Tapacarí, encabezados por Alejo Véliz, decidieron recuperarla, iniciándose así una batalla con cuchillos, piedras y fierros que dejó numerosas víctimas. Mientras Felipe Quispe, ejecutivo de la CSUCB, expulsaba a Román Loayza de la Federación Campesina, éste hizo detener a Alejo Véliz por tentativa de homicidio.

COMENTARIO. Ambos bandos se acusan de manipulación, falsificación e impostura, poniendo en marcha una suerte de guerra fratricida que acabará por ignorar los verdaderos problemas que aquejan al campesinado.. El dirigente de la COB Walter Antezana interpreta la disputa como consecuencia de la sectaria enemistad entre Alejo Véliz y Evo Morales. Pero más allá de caudillismos personales se puede percibir la dificultad que tiene el movimiento campesino para superar sus limitaciones sectoriales y localistas y visualizar los problemas sociales y nacionales.

4. LINCHAMIENTOS EN BARRIOS POPULARES DE COCHABAMBA

LOS HECHOS. Vecinos de Buena Vista ignoraron las leyes e hicieron justicia por sus propias manos, linchando a dos presuntos delincuentes y alegando para ello que no creen ni en la justicia ni en la policía. Sorprendidos en el robo de una bicicleta, una garrafa y 800 bolivianos fueron colgados de un árbol y furiosamente golpeados. La PTJ ha logrado identificar a los dos ejecutados y está detrás de los instigadores del linchamiento.

COMENTARIO. Es evidente que la policía y la justicia no gozan de la confianza de nadie, menos aún de los más desposeídos. Pero también es evidente que dos penas de muerte sin proceso por una garrafa, una bicicleta y 800 bolivianos contrastan de manera insoportable con la impunidad de los grandes responsables de la pobreza de este país, que se esconden detrás de contratos internacionales dañinos al país, políticas neoliberales y finalmente un puñado de políticos y autoridades inescrupulosos cuyos actos de corrupción son encubiertos por el sistema político y judicial . El trasfondo último de tales desproporciones está en la angustia y la rabia acumuladas por las víctimas del sistema que, incapaces de diagnosticar y sancionar a los auténticos culpables de su situación, vuelcan su ira en individuos cuya conducta antisocial es otra consecuencia del mismo inhumano sistema. El odio y la violencia de pobres contra pobres constituye la más aberrante ventaja de los poderosos.

5. EL CONFLICTO DEL AGUA EN COCHABAMBA:

ASAMBLEA DE LA COCHABAMBINIDAD VERSUS CONSULTA POPULAR

LOS HECHOS. El 24 de marzo la Asamblea de la Cochabambinidad ratificó los acuerdos avanzados por el Comité Cívico con el gobierno, referidos fundamentalmente a la revisión de la Ley 2029 y al congelamiento de tarifas hasta diciembre de este año, y desconoció de antemano la Consulta Popular convocada por la Coordinadora para el domingo 26 de marzo. Sin embargo la Coordinadora, a tiempo de descalificar la representatividad del Comité Cívico, informa que esta consulta, organizada a través de 190 mesas de sufragio, obtuvo la opinión de 48.570 ciudadanos/as que masivamente rechazaron el aumento de tarifas y la privatización del agua.

COMENTARIO. La masiva respuesta de la consulta demuestra que la Coordinadora en realidad sigue representando a sectores muy amplios de la sociedad civil. Son los sectores que definitivamente no creen ni en el Superintendente, ni en los ministros que negocian a nombre del gobierno, ni menos aún en el consorcio Aguas del Tunari. La movilización que la Coordinadora ha convocado para estos días será clara señal de que la población tampoco cree en las propuestas alternativas del Comité Cívico.

TEMA DE ANÁLISIS: EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO

Antecedentes

Las crisis mexicana, asiática y brasilera ocasionaron inevitablemente una paulatina paralización de la economía nacional, paralización que los representantes gubernamentales se empeñaron durante mucho tiempo en camuflar tras el término de *desaceleración*. Sin embargo el crecimiento cero con que concluyó 1999, más la dura carga que significó para la economía el incremento permanente de los precios de los hidrocarburos, obligaron al gobierno a reconocer la existencia de una recesión económica que requería una respuesta de urgencia. Eso es lo que pretende hacer el controvertido Plan de Reactivación Económica.

El contenido del Plan

Son cuatro los *pilares* en que se basa la reactivación:

1. Reactivación Financiera. Consiste en autorizar a la Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO, un banco de segundo piso) la emisión de bonos de largo plazo, denominados "Bonos de Reactivación", por valor de 250 millones de dólares con el fin de fortalecer la capacidad financiera de la banca y superar el problema que viene planteando la excesiva mora de sus prestatarios (mediante la reprogramación de sus créditos). Dicho mecanismo se refuerza con la eliminación del Régimen Complementario al IVA para los intereses ganados por depósitos a más de tres años (con lo que se pretende incentivar el ahorro).
2. Incentivos tributarios a la producción. Consiste en la rebaja de aranceles para la importación de bienes de capital y para las exportaciones, eliminación del IVA para la actividad del turismo exterior, reducción de impuestos a las actividades forestales, y sobre todo liberación de impuestos (IVA e IT) para las transacciones bursátiles.
3. Recuperación de la red caminera. Consiste en poner a disposición del Servicio Nacional de Caminos (que se transformará en entidad de derecho público de carácter autárquico, con personalidad jurídica y patrimonios propios) un monto total de 35 millones de dólares, procedentes de diversas fuentes, para la atención de los problemas inmediatos y urgentes que plantean las rutas troncales. Además se identifica una lista de proyectos carreteros, por un valor aproximado de 750 millones de dólares, a los que se deberá atender en los próximos dos años.
4. Programas de emergencia frente a la pobreza. Consiste en la creación de fondos de inversión para la financiación de proyectos de emergencia, con uso intensivo de mano de obra, en colaboración con los municipios del país. El programa se iniciará con 8 millones de dólares para El Alto y luego se expandirá a otras zonas deprimidas. Se pretende captar hasta fin de año 100 millones de dólares para los municipios.

Críticas al Plan

Una primera crítica, profusamente expresada en la prensa, se refiere a la forma apresurada de su promulgación "por orden del Poder Ejecutivo", sin aceptar la moción de propuestas alternativas y, lo que es más grave, sin el quorum reglamentario e incluso con la participación simultánea de diputados titulares y suplentes.

Más graves son las críticas de fondo:

- El diario Opinión comenta que se trata de un Plan elaborado por banqueros, importadores e industriales, al margen de toda discusión ideológica y representación política.
- La Federación Boliviana de la Pequeña Industria considera que el Plan es insuficiente y basado en recursos ficticios, opinión que es compartida por la Fundación para Alternativas Económicas (FADES). Tampoco los empresarios privados cruceños se muestran muy convencidos de la viabilidad del Plan.
- El experto Carlos Villegas (de la UMSA) opina que el Plan es demasiado optimista y que incluso constituye un "premio a la falta de previsión e ineficiencia del sistema financiero"; cree que el proyecto, coherente con el modelo, otorga todo el protagonismo a la gran empresa privada (en detrimento a la larga de las arcas del estado) y margina a los otros agentes económicos. En la misma línea la Fundación Milenio afirma que el Plan es una venta de ilusiones (un mero juego contable); critica el hecho de que la reactivación financiera está destinada a beneficiar sólo a los deudores en mora, mientras no plantea nada concreto en favor, por ejemplo de los agricultores cruceños; y califica de "arbitrariedad espeluznante" el decreto que reglamenta los nuevos aranceles para los bienes de importación; y asegura finalmente que el Plan no llegará al ciudadano/a de a pie.

- El presidente del Colegio de Economistas de Cochabamba califica el Plan como un listado de buenas intenciones que no logrará resolver los problemas creados por 15 años de liberalismo ortodoxo y agravados por medidas recientes como el incremento del ICE. En la misma línea Alberto Bonadona comenta que fomentar el ahorro es disminuir el consumo y acabar de contraer la demanda. Fernando Prado lamenta que se siga creyendo en la vieja teoría de la "torta y el derrame" y compara el Plan del gobierno con la parábola bíblica del rico Epulón y el pobre Lázaro.
- Las alcaldías hacía dos semanas que habían objetado el Plan de Reactivación y exigían en cambio la flexibilización de la Ley Financial de este año.
- Dirigentes obreros de Tarija afirman que la reactivación productiva sólo llegará a sectores privilegiados del eje central. Tanto los Gremialistas como la Asociación de Organizaciones Productivas Campesinas y otras organizaciones populares, están seguros que el programa no ayudará a resolver el bajo rendimiento y productividad de la economía boliviana.
- Las AFP's ven con preocupación la transformación de sus depósitos de corto plazo en otros de largo plazo (sin las suficientes garantías de parte de la banca privada).
- El MNR y la NFR (e incluso el MIR, antes de votar por su aprobación) coincidían en lamentar la falta de un componente social en el Plan. El dirigente Jorge Torres recuerda con razón el fracaso de la Ley de Propiedad y Crédito Popular, lo que de hecho permite dudar de la eficacia de esta nueva medida
- Hasta el representante del FMI, siempre entrometido, preguntaba en Santa Cruz de dónde sacaría el gobierno el dinero necesario para la reactivación.

La contrapropuesta del MNR

Por una parte el jefe del MNR ha formulado críticas al Plan por su ortodoxia fondomonetarista y por no adecuarse a la situación real de recesión, y ha propuesto una política ambiciosa de inversión pública, más la derogatoria del último incremento del ICE, todo ello con el fin de dinamizar la actividad productiva y de generar programas sociales de amplio beneficio.

Sin embargo a la hora de presentar formalmente un programa alternativo de reactivación, el mencionado partido concentra su propuesta en que la emisión de los bonos ascienda a 600 millones de dólares y no esté a cargo de NAFIBO sino de FONDESIF; en la reducción del IVA y el IT en un 0.5% (más la eliminación del ICE), en la restitución del Bonosol y en la renegociación de recursos con el FMI.

Intento de conclusiones

Lo menos que cabe decir es que el Plan de Reactivación deja insatisfechos a la mayor parte de los sectores. Para la mayoría es claro que el único realmente beneficiado es el sector financiero que no es precisamente el más golpeado por la crisis (en 1999 reportaba una ganancia de 44 millones de dólares). Suponiendo pues que los 250 millones de dinero teórico llegarán a convertirse en reactivación real, ésta alcanzaría para pagar las deudas de la Cámara Agropecuaria del Oriente y poco más. Por tanto se puede afirmar que la primera *columna* es endeble e insuficiente. Pero además es peligrosa. Porque los tales bonos se emitirán sobre la base de la "fe del estado", es decir se cargan todos los riesgos del manejo bancario —una vez más— sobre la economía ya precaria de la población.

Los incentivos tributarios no modifican en lo esencial la estructura arancelaria del país (expresada básicamente en la libre importación, decretada por el 21060), pero además son evidentemente arbitrarios y sesgados: se facilita la importación de aviones y helicópteros (!); se carga con un 5% a las humildes máquinas de coser, mientras se establece un 0% para la importación de ductos y otros insumos para las capitalizadoras; se establece 0% para la importación de rieles y se grava con un 5% la importación de durmientes; etc. Esto sin entrar a analizar el contenido de la "autofacturación" de las minas, que recuerda atávicos privilegios...

La *columna* indudablemente más significativa, la recuperación de la red caminera, aparece dotada de una asignación totalmente insuficiente. Pero más insuficiente aún si se tiene en cuenta el tradicional manejo de los contratos para construcción de carreteras, que sistemáticamente han conducido a la defraudación de esos recursos (la gran estafa de la carretera Chimoré-Yapacaní sigue sin ser investigada).

Finalmente los fondos para la inversión pública de emergencia no están en absoluto garantizados. Además en este punto es inevitable preguntarse a dónde fueron a parar los 84 millones de dólares que, procedentes del Primer Plan de Alivio de la Deuda, estaban destinados a paliar situaciones de pobreza.

En síntesis, lo menos que se puede decir del Plan de Reactivación es que no está a la altura de la crisis ni de sus causas, que son estructurales y no de manejo financiero.

En cuanto a la propuesta del MNR, con un FONDESIF agotado por los manejos de Fernando Romero y David Blanco (*Black&White*), con una insignificante y ridícula propuesta de rebaja del IVA y del IT, con una experiencia de Bonosol a costa del TGN, y con un estado absolutamente descapitalizado e incapaz de invertir, se puede calificar del típico planteamiento demagógico que es muy fácil hacer desde la oposición.

MISCELÁNEA

- El Congreso Nacional decidió no tratar el caso de Marino Diodato (quien había solicitado su extradición a los EEUU), pues *sería nefasto* según el Presidente de Diputados; decisión que tranquiliza a los partidos mayoritarios del país (ya que entre otras cosas *Bolivian Times* había informado de la existencia de videos en que se veía a connotados políticos en orgías pagadas por Diodato).
- Tras la renuncia forzada del ministro de Informaciones Jorge Landívar (denunciado por la Embajada Norteamericana de haber interferido en el caso Diodato), fue designado para el "riesgoso cargo" de ministro de Informaciones Ronald MacLean, a la sazón concejal de ADN en el municipio de La Paz.
- El polémico caso del aborto de una niña violada (cf. *Boliviapress* anterior) culminó en La Paz, donde se llevó a cabo la operación con el apoyo de organizaciones feministas. Según la prensa local, *la niña está contenta porque podrá continuar su vida futura*.
- Finalmente falleció el ex Vista de Aduanas Enrique Velasco, de quien se dice que fue envenenado para que no pudiera declarar lo mucho que sabía en el caso RENASA. Sus familiares acusan de la muerte al Gobierno y afirman que la defraudación alcanza a 1.000 millones de dólares, defraudación que según el Alcalde de Cochabamba era de pleno conocimiento del Presidente Bánzer y de sus antecesores.
- La creciente iliquidez amenaza a diversos sectores y permite temer convulsiones sociales. Mientras un informe del Viceministerio de Participación Popular afirma que la deuda municipal ha superado los 300 millones de dólares, el ministro de Educación advierte que no hay dinero ni para incrementar items en el magisterio ni para reforzar el presupuesto de las universidades.
- Se descubre otra irregularidad en la ayuda a las víctimas del terremoto de Aiquile: Según el diputado Roberto Fernández varias donaciones de la China y República Dominicana se esfumaron en el Aeropuerto de El Alto, mientras del Ministerio de Defensa desapareció la documentación correspondiente.
- En un caso inédito, el sargento de policía Darwin Hinojosa sostiene una huelga de hambre en recintos de la COB en defensa de sus derechos humanos y laborales, gravemente vulnerados por su institución, la que como única respuesta anuncia que el sargento será dado de baja.